

## **Migrantes unidos**

### **José Luis Piñeyro**

### **13 de mayo de 2006**

A fines de mayo, el Senado y la Cámara de Representantes de EU presentarán una ley que pretenderá dar algún tipo de solución para la enorme población migrante indocumentada mexicana que demanda derechos laborales y ciudadanos. Todo indica que al interior del Congreso no va a ser fácil llegar a un acuerdo dados los malhumores conservadores que impulsan un programa de trabajadores temporales y mayores requisitos para la eventual regularización de ciertos trabajadores migrantes. La actitud ambivalente del presidente Bush en sus declaraciones públicas sobre el problema migratorio no permite abrigar esperanzas.

El movimiento pro legalización integral de los migrantes mexicanos afina tácticas comunes, busca aliados con otras minorías (negros, latinoamericanos, polacos, musulmanes, entre otros), acepta el apoyo de legisladores estatales y federales -advenedizos unos, consecuentes otros- manda señales al Congreso sobre la importancia del voto latino para las próximas elecciones, acude a los medios masivos de comunicación, busca apoyo en los sindicatos nacionales de industria y servicios y en las distintas congregaciones religiosas. En fin, se estructuran y afinan diversas formas de lucha política pacíficas y legales pues no se puede confiar que las recientes manifestaciones y el boicot laboral, estudiantil y de consumo hayan sido suficientes para sensibilizar al Poder Legislativo, al poder presidencial y a los grupos económicos dominantes.

Sin embargo, existen diferentes evaluaciones sobre el impacto de las movilizaciones y del boicot como formas tácticas de acción: la mayoría se pronuncia a favor de las movilizaciones, pero algunos consideran que el boicot los alejó de sectores sociales potencialmente aliados. Se señala que la dispersión/concentración geográfica de los migrantes y sus diversos orígenes sociales, así como su ubicación laboral, son elementos paralizantes y de eventual división entre el movimiento pro migrantes.

Lo cierto es que las visiones y voceros en pugna prosiguen con sus iniciativas justificatorias. Así, el representante republicano James Sensenbrenner destaca que de acuerdo con un estudio de la Biblioteca del Congreso de EU sobre leyes migratorias de Japón, Brasil, México, Egipto, Suecia y Suiza, los mayores castigos y penas para los migrantes ilegales los contienen las leyes mexicanas; de ahí que para qué hacer "toda esa tempestuosa retórica procedente de los opositores sobre el anteproyecto de una ley de la Cámara", o sea, su propuesta de ley que criminaliza a los migrantes ilegales y a quienes los ayuden. Por su parte, Joel Magallán, director de la Asociación Tepeyac, una de las principales organizaciones comunitarias de Nueva York, planteó ubicar y movilizar en la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut a los cerca de 100 mil hijos de inmigrantes mexicanos mayores de 18 años para que voten en las elecciones de fin de año. De forma más inmediata, una coalición en formación de organizaciones defensoras de inmigrantes plantea realizar una marcha y manifestación frente a la Casa Blanca el próximo viernes 19 de mayo a manera de presión para que Bush use su influencia entre los legisladores republicanos.

El trasfondo de este estira y afloja está en la pregunta: ¿hasta dónde la clase política gobernante y la clase económica dominante están dispuestas a otorgar la ciudadanía?, dado el gran esfuerzo y contribución económica y cultural que por décadas han hecho los millones de migrantes legales e ilegales al poder nacional de EU. El argumento de que primero se debe fortalecer y garantizar la seguridad fronteriza antiterrorista y después hablar de regularización migratoria es tan falso como que la invasión a Irak pretendió transformar a los súbditos de Saddam Hussein en ciudadanos e instaurar la democracia. Legalizar el millonario universo migrante permitiría un verdadero control poblacional de los hasta hace poco invisibles indocumentados y fortalecer la seguridad nacional en su versión antiterrorista, dado que es de suponer que los nuevos ciudadanos se sentirían identificados con las instituciones del Estado y del régimen político frente a posibles atentados terroristas. Todo indica que la adormecida y oligárquica democracia electoral parlamentaria de EU va a requerir de democracia participativa, directa y callejera para que las instituciones estatales despierten y respondan a las demandas de quienes reclaman ejercer su merecida ciudadanía.

pineyro@aol.com

Profesor investigador UAM-A